

**Setenta años
de Constitución Italiana
y cuarenta años
de Constitución Española**
Volumen II
Derechos fundamentales

DIRECTORES:

**ANTONIO PÉREZ MIRAS
GERMÁN M. TERUEL LOZANO
EDOARDO C. RAFFIOTTA
MARIA PIA IADICICCO**

COORDINADORA:

CARMEN MONTESINOS PADILLA



eucons



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Eucons es un proyecto Jean Monnet, financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, que nace con el objeto de promover el debate académico sobre las bases constitucionales de la construcción europea. Apuesta por el reconocimiento de una “cultura constitucional común europea”, a través de la cual poder afrontar los desafíos de nuestras democracias y del proceso de integración supranacional.

Este diálogo se sustenta en tres pilares: 1) rigor y excelencia académica, para lo cual se cuenta con un comité científico internacional que apoya a la organización y orienta el diseño de las actividades que se realizan; 2) carácter intergeneracional, buscando el diálogo entre las distintas generaciones de universitarios y promoviendo la participación de los más jóvenes junto a consagrados académicos; 3) dimensión europea, tanto por los temas que aborda como por los participantes e integrantes de esta red de investigadores.

Este proyecto está coordinado por Germán M. Teruel Lozano, profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Murcia; Antonio Pérez Miras, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Granada; y por Edoardo C. Raffiotta, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Bolonia. Y colaboran la Universidad de Murcia, como responsable del proyecto, la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, la Escuela de Doctorado de Derecho de la Universidad de Bolonia y el Seminario Ítaloespañol de estudios constitucionales.

Precisamente este último, el Seminario Ítaloespañol, fue el origen de este proyecto. El mismo se creó como un grupo de estudio en 2011 por iniciativa de jóvenes investigadores españoles e italianos, en el ámbito de colaboración entre la Universidad de Bolonia y el Real Colegio de España en Bolonia. Esta red de investigadores ha venido promoviendo la celebración de un congreso bienal desde entonces, con 4 ediciones hasta el momento: Bolonia (2012), Madrid (2014), Catania (2016) y Murcia (2018). Las cuales han dado lugar a distintas obras colectivas que han afrontado diferentes temas de actualidad constitucional: la tutela de los derechos de la persona; la integración europea o cuestiones en relación con la soberanía y la representación en la era de la globalización. El último de ellos ha sido los desafíos del constitucionalismo contemporáneo con ocasión del 70 y 40 aniversario de las Constituciones italiana y española.

SETENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ITALIANA Y CUARENTA AÑOS
DE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

CONSEJO ASESOR DE LA COLECCIÓN DE DERECHO PÚBLICO

Directora

Yolanda Gómez Sánchez

Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Catedrática Jean Monnet, *ad personam*, de la Unión Europea

Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Enrique Arnaldo Alcubilla, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y Catedrático Jean Monnet, *ad personam*, de la UE.

Andrés Betancor Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

María José Cíaurriz Labiano, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED.

Miguel Ángel Collado Yurrita, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Juan Damián Moreno, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid.

Carlos Fernández de Casadevante Romani, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Teresa Freixes Sanjuán, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y Catedrática Jean Monnet, *ad personam*, de la UE.

Eugeni Gay Montalvo, Abogado.

José María Gil-Robles Gil-Delgado, Catedrático Jean Monnet, *ad personam*, de la UE y Presidente de la Fundación Jean Monnet pour l'Europe.

Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED.

Doctora Tania Groppi, Catedrática de Derecho Público de la Universidad de Siena.

Emilio Jiménez Aparicio, Abogado.

Diego Manuel Luzón Peña, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares.

Fernando Martín Díz, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED.

Doctor Nuno Piçarra, Professor of EU Justice and Home Affairs Law de la Nova Universidad de Lisboa.

Miguel Recuerda Girela, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.

José Suay Rincón, Catedrático de Derecho Administrativo y Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Antonio Torres del Moral, Catedrático Emérito de Derecho Constitucional de la UNED.

Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense.

SETENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ITALIANA Y CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

ANTONIO PÉREZ MIRAS
GERMÁN M. TERUEL LOZANO
EDOARDO C. RAFFIOTTA
MARIA PIA IADICICCO
(Directores)

CARMEN MONTESINOS PADILLA
(Coordinadora)

VOLUMEN II

Derechos fundamentales



eucons



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



FUNDACIÓN CAJAMURCIA

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
MADRID, 2020

Primera edición: febrero de 2020

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de *publicaciones*, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar.

La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Con el patrocinio del Programa Erasmus+ de la Unión Europea y de la Fundación CajaMurcia.

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

NIPO AEBOE: 090-20-030-0 (edición en papel).
090-20-031-6 (edición en línea, pdf).
090-20-032-1 (edición en línea, epub).

NIPO CEPC: 091-20-012-5 (edición en papel).
091-20-013-0 (edición en línea, pdf).
091-20-014-6 (edición en línea, epub).

ISBN: 978-84-340-2602-5

Depósito legal: M-37543-2019

IMPRENTA NACIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

ÍNDICE

PRÓLOGO.....	11
NOTA DE LOS DIRECTORES	15
NOTA DEI CURATORI	19

VOLUMEN II: DERECHOS FUNDAMENTALES

PARTE 1. TUTELA MULTINIVEL Y DIÁLOGO ENTRE TRIBUNALES	
2.1.1 Las costuras de los derechos. <i>Pablo Riquelme Vázquez</i>	25
2.1.2 El rol del Protocolo n. 16 al CEDH en el dialogo entre Tribunales para una protección de los derechos más uniforme. Reflexiones al hilo de sus características y de la propuesta italiana de ratificación. <i>Silvia Romboli</i>	41
2.1.3 «Controlimiti» e dialogo tra Corti a partire dalla conclusione del caso «Taricco» nella sentenza della Corte costituzionale italiana n. 115 del 2018. <i>Antonello Lo Calzo</i>	63
2.1.4 <i>Taricco iactum est</i> ovvero l'incidenza della Saga Taricco nel processo costituzionale europeo. <i>Francesco Torre</i>	81
2.1.5 La Corte costituzionale italiana riafferma la propria centralità nella tutela dei diritti rispetto al circuito giudici nazionali-giudici sovranazionali. <i>Stefania Leone</i>	99
2.1.6 Las sentencias piloto como mecanismo de integración europea en materia penitenciaria. <i>Sara Turturro Pérez de los Cobos</i>	119
2.1.7 Derecho al respeto de la vida familiar (art. 8 CEDH): el Tribunal Constitucional español y la Corte constitucional italiana en diálogo con el Tribunal de Estrasburgo. <i>Lara Redondo Saceda</i>	133
PARTE 2. INTIMIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA	
2.2.1 <i>Quo vadis, intimidad?</i> <i>Daniel Jove Villares</i>	151

	Páginas	
2.2.2	La conciliación entre la libertad de información y el derecho a la protección de datos: ¿una misión imposible? <i>Laura Villalba Cano</i>	167
2.2.3	Las garantías constitucionales de los derechos a la libertad informática en América Latina. <i>Diana María Castano Vargas</i>	183
2.2.4	De nuevo sobre el poder de control empresarial y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: doctrina Barbulescu. <i>Francisco Ramos Moragues</i>	197
2.2.5	Privacy e segreti: è possibile estendere ai <i>big data</i> le tutele dell' habeas corpus? <i>Elena Falletti</i>	213
2.2.6	El derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. <i>Eloísa Pérez Conchillo</i>	229
2.2.7	Transparencia y secretos de Estado: Las restricciones al derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno. <i>José Antonio Sendín Mateos</i> ..	245
PARTE 3. VULNERABILIDAD, INMIGRACIÓN Y MENORES		
2.3.1	Un <i>fil rouge</i> : la «vulnerabilità» quale nuovo (o innovativo) paradigma per una tutela effettiva dei diritti fondamentali. <i>Roberto Di Maria</i>	263
2.3.2	I diritti fondamentali degli stranieri extracomunitari. <i>Guglielmo Aldo Giuffrè</i>	277
2.3.3	L'accoglienza integrata dello straniero per la «ricomposizione» dell'ordinamento. <i>Cristina Bertolino</i>	295
2.3.4	La gestione dei flussi migratori tra istanze collaborative e spinte centrifughe. <i>Ilaria Rivera</i>	313
2.3.5	Il diritto di asilo in Spagna e in Italia: la realizzazione dei diritti minimi dei rifugiati e dei richiedenti asilo. <i>Ekaterina Krapivnikskaya, Roberta Brunetti</i>	331
2.3.6	La insuficiente protección de los derechos de los solicitantes de protección internacional en la UE: una exigencia pendiente. <i>María Dolores Requena de Torre</i>	351
2.3.7	La tutela della salute dell'immigrato in Italia e in Spagna. <i>Giorgia Crisafi</i>	367
2.3.8	La protección del libre desarrollo de la personalidad del menor en los procesos de custodia compartida. <i>Esther Alba Ferré</i>	385
2.3.9	La protección del menor del artículo 39 de la Constitución en las medidas a adoptar en cuanto a su custodia. <i>Carmen Florit Fernández</i>	401
2.3.10	Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche: evoluzione giurisprudenziale e nuove frontiere problematiche di una pecu-	

liare declinazione del diritto all'identità personale. <i>Giulia Battaglia</i>	413
2.3.11 Congedo obbligatorio di paternità e condivisione dei compiti genitoriali di cura dei figli. <i>Bruno Brancati</i>	429
2.3.12 Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione. <i>Felice Giuffrè</i>	443
 PARTE 4. OTROS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN	
2.4.1 El derecho humano al agua. <i>Belén Burgos Garrido</i>	471
2.4.2 Una aproximación constitucional al derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. <i>Juan Manuel Martín Guerrero</i>	491
2.4.3 Los derechos constitucionales del deudor en la sección de calificación concursal. <i>Miguel Martínez Muñoz</i>	507
2.4.4 La protección del consumidor y su encaje en las Constituciones española e italiana. Un análisis de los instrumentos de tutela colectiva. <i>Diego Agulló Agulló</i>	521
2.4.5 El cese de la junta directiva de una asociación por revocación de la asamblea general. <i>Jokin Babaze Aizpurua</i>	537
2.4.6 Un repaso a la evolución (o involución) del principio de justicia universal en España. <i>Jacqueline Hellman</i>	551

PRÓLOGO

Esta extensa e importante obra recoge las aportaciones científicas de ciento cincuenta y seis participantes en el IV Congreso Internacional ítalo-español celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia del 28 al 30 de noviembre de 2018 y a cuyas sesiones también asistieron más de cien estudiantes. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que me honro en dirigir, ha prestado su apoyo y colaboración institucional, junto con el Boletín Oficial del Estado, a la coedición de esta obra. Ya en su cuarta edición y bajo el título, en esta ocasión, de *Perspectivas del constitucionalismo contemporáneo*, este Seminario ítaloespañol da continuidad a un proyecto singular, iniciado por Antonio Pérez Miras y Germán M. Teruel Lozano, cuando apenas estaban finalizando sus estudios de doctorado en el Real Colegio de España en Bolonia, y Edoardo Raffiotta, profesor de esa Universidad italiana, donde se celebró el 3 y 4 de mayo de 2012 el primer seminario. A aquella experiencia le han seguido las ediciones de Madrid en 2014, Catania en 2016 y la ya mencionada de Murcia en 2018, con un carácter bienal y una alternancia geográfica que son señas de identidad de este Seminario Internacional.

La experiencia del seminario celebrado en Bolonia en 2012 no pudo ser más satisfactoria. Con una metodología conocida pero poco aplicada en el ámbito universitario español, investigadoras e investigadores séniores y novales interactúan dentro de ámbitos temáticos definidos en cada edición del Seminario a los que se unen otras aportaciones que se incorporan a la publicación que ha recogido los resultados de cada seminario. Tuve la oportunidad de participar en la primera edición de 2012 y he seguido participando, de una u otra forma, en las ediciones siguientes, lo que me ha permitido comprobar no solo la evolución del proyecto sino también la de sus propios artífices. Tanto Ger-

mán M. Teruel Lozano como Antonio Pérez Miras desarrollan sendas carreras docentes e investigadoras (en las Universidades de Murcia y Granada respectivamente) y atesoran ya méritos relevantes a los que, con seguridad, se les unirán otros en el futuro. Su capacidad para organizar con éxito cuatro ediciones del seminario internacional ítalo-español, en el que han participado cientos de ponentes, comunicantes y moderadores y, también, otros cientos de estudiantes, así como haber coordinado la correspondiente publicación de cada uno de ellos avalan el alto nivel de gestión de la investigación que poseen ambos investigadores.

Que la democracia requiere continua atención y tutela no es una afirmación nueva, pero conviene insistir en que ningún logro democrático permanece sin su defensa constante. Quizá, por ello, los organizadores de este IV seminario internacional ítalo-español han querido referirse en el título del mismo a las perspectivas del constitucionalismo contemporáneo, en clara alusión al pasado, presente y futuro del constitucionalismo democrático. Desde hace algo más de una década, la democracia constitucional ha sido puesta a prueba, una vez más; la crisis económica ha producido un innegable desgaste en las instituciones; la ciudadanía ha perdido confianza en el sistema y éste se ha visto incapaz de dar respuesta a retos que no eran esperables y que han castigado severamente a amplios sectores de población. Las medidas adoptadas por los Estados han sido desiguales, tanto en su aplicación como en sus resultados. Quizá no podía ser de otra manera, con una multiplicidad de sociedades diversas con intereses frecuentemente contrapuestos. Aun en este contexto, ciertamente convulso, una cosa sí puede afirmarse: solo el sistema constitucional democrático puede aportar soluciones basadas en la libertad, la justicia y la igualdad. Ante circunstancias adversas debe profundizarse en vías de solución, en cambios que renueven el sistema, pero nunca debe renunciarse a un modo de convivencia democrático que es el único que puede aportar vías de solución y de mejora. Las dificultades no deben llevarnos a una crítica fácil e inicua del constitucionalismo, en torno al cual se han construido sociedades democráticas basadas en el respeto a la ley y a los derechos de las personas, sino a un fortalecimiento de nuestra conciencia democrática y de nuestra adhesión al sistema constitucional.

A lo largo de los numerosísimos capítulos contenidos en los cinco volúmenes que integran esta obra se analizan gran parte, sino todos, los grandes retos del constitucionalismo actual; un constitucionalismo que se debate entre sus fundamentos dogmáticos y los cambios que ineludiblemente deberán abor-

darse para acomodarlo a las nuevas demandas de una sociedad globalizada y enfrentada a desafíos innegables. En su IV edición, este seminario internacional tenía dos referencias inexcusables para cualquier constitucionalista, ya que en 2018 se celebró el 40 aniversario de la Constitución española, casi en coincidencia con el 70 aniversario de la Constitución italiana de 1947. No podía un seminario italo-español olvidar tan importantes efemérides en España e Italia, donde el constitucionalismo democrático ha sabido abrirse paso a pesar de algunas oscuras páginas de su historia. Por ello, los primeros artículos de esta obra están dedicados a tratar estos periodos constitucionales y algunos de los aspectos sobre los que se ha reflexionado en relación a posibles reformas constitucionales. Junto a éstos, se incluyen los trabajos relativos a la dimensión constitucional de Europa, que plantea a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de afrontar nuevos retos si no quieren perder lo mucho que se ha conseguido con la integración supranacional. La salida del Reino Unido de la Unión Europea está siendo uno de los asuntos más controvertidos en este proceso. El tiempo dirá cuál de las dos partes pierde o gana más con esta separación, aún pendiente, pero la historia constatará la dificultad, en el plano jurídico y en el político, de abordarla, a pesar de la claridad del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, cuya aplicación ha dado lugar a que la Unión haya demostrado, una vez más, su fortaleza y la vigencia de sus principios inspiradores.

A estos trabajos iniciales le siguen otros muchos de igual interés, como los más de treinta artículos dedicados a los derechos fundamentales, en los que podemos encontrar un conjunto muy relevante de aportaciones sobre temas centrales en el constitucionalismo de este siglo. Algo parecido cabe decir sobre el volumen tercero, que recoge las contribuciones referidas a las instituciones políticas y a la democracia, con trabajos sobre democracia parlamentaria, representación y participación política, sistema electoral y partidos políticos y grupos. Se completa el análisis global del constitucionalismo con casi una veintena de aportaciones sobre el sistema de fuentes, la organización territorial y la justicia constitucional, en los que se pone de manifiesto la necesidad de seguir reflexionando sobre asuntos clásicos pero a la luz de nuevos desafíos.

Un último volumen de esta vasta obra, bajo el título «Retos del siglo XXI», recoge cuatro grandes ámbitos de reflexión: el Estado social y la economía; la era de la tecnología y el cambio climático; la seguridad y la legalidad sancionadora; y el fenómeno religioso. Respecto a cada uno de ellos se puede encontrar un conjunto de trabajos que apuntan hacia las transformaciones necesarias en un constitucionalismo que debe adaptarse a las necesidades de una sociedad

■ SETENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ITALIANA Y CUARENTA AÑOS...

en evolución pero que debe seguir siendo la referencia obligada para la organización del poder político y para la garantía de la libertad.

No cabe sino concluir felicitando a todos los que participan en esta obra por sus aportaciones y, muy especialmente, a los directores de la misma, los profesores Germán M. Teruel Lozano, Edoardo C. Raffiotta, Maria Pia Iadicicco y Antonio Pérez Miras, y a los distintos coordinadores de los volúmenes, los profesores Silvia Romboli, Carmen Montesinos Padilla, Aday Jiménez Alemán y Fernando Pérez Domínguez, por la labor realizada, esperando que continúen con esta estimable iniciativa en años venideros.

YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Catedrática de Derecho constitucional
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

NOTA DE LOS DIRECTORES

Las efemérides son una buena ocasión para hacer balance, tratar de captar la realidad cotidiana y alzar la vista crítica al retrovisor de los años que nos han traído irremediablemente al presente, y que nos coloca ante las incertidumbres del futuro. Así, y como no podría ser de otro modo, el Seminario Ítaloespañol de estudios constitucionales ha querido contribuir en 2018 a la conmemoración del 70º aniversario de la Constitución italiana y del 40º de la Constitución española, enmarcando por vez primera nuestros encuentros bienales en el marco del proyecto Jean Monnet Eucons.

Europa, en realidad el mundo entero, vive un momento complejo. En particular los ritmos de la globalización económica, los avances tecnológicos, los profundos cambios sociales y las convulsiones político-institucionales por las que están pasando las democracias occidentales hacen más que necesario que nos preguntemos por las perspectivas del constitucionalismo contemporáneo. Por ello, fieles a nuestro compromiso, nos congratulamos de presentar los estudios «Setenta años de Constitución italiana y cuarenta de Constitución española», reunidos en cinco volúmenes, que afrontan el análisis de los distintos desafíos que acucian al constitucionalismo contemporáneo.

El Seminario Ítaloespañol de estudios constitucionales, que nació en Bolonia en el 2011 casi como una aventura, fruto de la colaboración entre colegas del Real Colegio de España en Bolonia y de jóvenes profesores del *Alma Mater*, se ha tornado hoy en un proyecto maduro que ha ido creciendo junto a las carreras académicas de sus promotores y de las sobresalientes incorporaciones a su grupo de trabajo. Ahora, la concesión por la Comisión Europea del Proyecto Jean Monnet Eucons ha dado un importante impulso a la iniciativa que adquiere plenitud al proyectarse más allá del espacio ítalo-español para

ponerse al servicio de la construcción de una cultura constitucional europea común, en un momento en el que resulta imperioso facilitar espacios de encuentro para los juristas europeos, que hagan de Europa una realidad constitucional más cohesionada.

Precisamente con ese espíritu haerberliano, el Seminario ha venido promoviendo congresos bienales que han reunido a centenares de constitucionalistas principalmente de ambos países: Bolonia (2012), Madrid (2014), Catania (2016) y, el último de ellos, ya con dimensión europea, en Murcia (2018). Del 28 al 30 de noviembre de 2018 se congregaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia 115 jóvenes investigadores, 55 profesores entre ponentes, moderadores y contraponentes, y más de 100 estudiantes para participar en el IV Congreso Internacional «Perspectivas del constitucionalismo contemporáneo». Un año después estamos en condiciones de publicar los resultados de aquella investigación, reuniendo en esta obra los trabajos de constitucionalistas italianos y españoles de todas las generaciones, desde los más jóvenes que todavía cursan sus estudios de postgrado a egregios maestros, junto a algunos colegas europeos. Con estos volúmenes se ejemplifican así los valores de nuestro proyecto: diálogo intergeneracional, excelencia académica y construcción europea.

El volumen II, intitulado «Derechos fundamentales», aborda algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los derechos y libertades de las personas en el contexto de nuestro mundo contemporáneo, intensamente interconectado e inmerso ya en la llamada «Revolución industrial 4.0». En el mismo, el lector encontrará más de una treintena de investigaciones que le aproximarán a los problemas de más ferviente actualidad en conexión con la garantía de los derechos, a nivel doméstico e internacional, como la articulación de mecanismos procedimentales para una protección multinivel eficaz y el resurgimiento de la doctrina de los contra-límites (parte 1); la recopilación, el tratamiento y el uso de datos en la era digital y su difícil conciliación con los derechos de la esfera personal (parte 2); el refuerzo de las reivindicaciones propias del Estado social a resultas tanto de la deriva desigualitaria de las sociedades contemporáneas y de las vulnerabilidades políticamente inducidas por el orden global de nuestra era, como de la progresiva modernización de instituciones tradicionales como la familia (parte 3); o los desafíos jurídico-prácticos de la regulación de «nuevos derechos» como los relacionados con la seguridad hídrica o el aprovechamiento de los beneficios de la ciencia (parte 4).

Con estos temas, y los abordados en los restantes volúmenes, analizamos la situación en la que se encuentran los Estados constitucionales en Europa, hacemos balance de la evolución que se ha vivido desde el final de la II Guer-

ra Mundial y de las respuestas que se han sucedido a los cambios en estas décadas, al tiempo que nos preparamos doctrinalmente para los retos que están por venir en el nuevo contexto global. El constitucionalismo sigue en expansión pero necesita de nuevos planteamientos para afrontar los actuales desafíos, especialmente acuciantes pasada una década en crisis, que no sólo ha impactado en la economía sino que también ha tenido profundos efectos sobre nuestros sistemas políticos. Observamos de esta forma la panorámica, espacial y temporal, del *ius commune* constitucional.

Así las cosas, comprometidos con los principios antes enunciados, hemos querido festejar la coincidencia de los dos aniversarios constitucionales abordando todas estas cuestiones mediante un debate intergeneracional que enriquezca la doctrina jurídica. Pero, si esta ingente obra ve la luz, es gracias, primero, a los que desinteresada y anónimamente nos han ayudado en cuidar todos los detalles, y en especial, al apoyo editorial del BOE, en coedición con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y a la financiación facilitada por el Proyecto Jean Monnet y por la Fundación Cajamurcia, a los que mostramos nuestra infinita gratitud. Un agradecimiento que no debe escudarse en las instituciones en sí sino que debe permear hasta las personas que desde aquellas nos han guiado hasta este puerto. Y nos van a permitir que nos detengamos en una de las personas que más ha colaborado con esta iniciativa desde sus comienzos, que creyó en el proyecto y nos ha hecho crecer como universitarios: la Profesora Yolanda Gómez, hoy Directora del CEPC y que con justicia prologa los cinco volúmenes sobre la doble efeméride constitucional de nuestras penínsulas europeas.

ANTONIO PÉREZ MIRAS, GERMÁN M. TERUEL LOZANO

EDOARDO C. RAFFIOTTA, MARIA PIA IADICICCO
Directores

CARMEN MONTESINOS PADILLA
Coordinadora

NOTA DEI CURATORI

Le ricorrenze sono una buona opportunità per fare il punto della situazione, per cercare di comprendere la realtà quotidiana, per sollecitare il pensiero critico attraverso un'indagine retrospettiva degli avvenimenti accaduti in anni passati e che ci hanno condotto fino al presente, ponendoci davanti al futuro con non poche incertezze. Proprio per questo, nel 2018, il Seminario Italo-spagnolo di studi costituzionali ha voluto contribuire alla commemorazione del 70° anniversario della Costituzione italiana e del 40° della Costituzione spagnola, inserendo altresì e per la prima volta il suo incontro biennale nell'ambito del progetto Jean Monnet Eucons.

L'Europa, come in realtà il mondo intero, attraversa un momento complesso. In particolare, i ritmi della globalizzazione economica, i progressi tecnologici, i profondi cambiamenti sociali e i disordini politico-istituzionali che stanno investendo le democrazie occidentali rendono quanto mai necessario domandarsi quali siano le prospettive del costituzionalismo contemporaneo. Per questo, facendo fede all'impegno assunto, siamo lieti di presentare gli studi «Setenta años de Constitución italiana y cuarenta de Constitución española», raccolti in cinque volumi, i quali analizzano approfonditamente alcune tra le diverse e più rilevanti sfide che deve affrontare il costituzionalismo contemporaneo.

Il Seminario Italo-spagnolo di studi costituzionali, nato a Bologna nel 2011 quasi come un'avventura, frutto della collaborazione tra membri della scuola del Reale Collegio di Spagna a Bologna e giovani professori dell'*Alma Mater*, si è convertito oggi in un progetto maturo che è cresciuto parallelamente alle carriere accademiche dei suoi promotori e grazie alla crescita del suo gruppo di lavoro, che ha incorporato nuovi ed eccellenti membri. Recente-

mente, la concessione da parte della Commissione Europea del Progetto Jean Monnet Eucons, ha dato un importante impulso all'iniziativa che acquisisce così pienezza proiettandosi oltre lo spazio italo-spagnolo e dedicandosi alla costruzione di una cultura costituzionale europea comune, in un momento in cui appare indispensabile fornire spazi di incontro per i giuristi europei, con lo scopo di rendere l'Europa una realtà costituzionale più solida.

Proprio con tale spirito haberliano, il Seminario ha promosso congressi biennali che hanno riunito centinaia di studiosi, prevalentemente ma non esclusivamente costituzionalisti, dei due Paesi citati, dapprima a Bologna (2012), poi a Madrid (2014), poi a Catania (2016) e, da ultimo, con una già più ampia dimensione europea, a Murcia (2018). Dal 28 al 30 novembre 2018, 115 giovani ricercatori, 55 professori, relatori, moderatori e *discussants* e oltre 100 studenti si sono riuniti nel IV Congresso Internazionale «Prospettive del costituzionalismo contemporaneo». Dopo un anno siamo in grado di pubblicare i risultati di quella poderosa ricerca, raccogliendo in questa opera i contributi di costituzionalisti italiani e spagnoli di tutte le generazioni, dai più giovani, ancora in formazione nei corsi post-lauream, agli illustri Maestri e colleghi europei. Questi volumi vogliono essere quindi una testimonianza dei valori sottesi al nostro progetto: dialogo intergenerazionale, eccellenza accademica e costruzione europea.

Il presente volume (II), intitolato «Diritti fondamentali», tratta alcune delle principali sfide che i diritti e le libertà delle persone devono affrontare nel mondo contemporaneo, intensamente interconnesso e immerso nella cosiddetta «Rivoluzione industriale 4.0». In esso, il lettore troverà più di trenta ricerche che lo introdurranno nelle questioni più scottanti relative alla garanzia dei diritti costituzionali, sia a livello nazionale che internazionale, come, ad esempio l'articolazione di meccanismi procedurali per un'efficace protezione a più livelli e la rinascita della dottrina dei contro-limiti (parte 1); la raccolta, l'elaborazione e l'uso dei dati nell'era digitale e la sua difficile riconciliazione con i diritti della sfera personale (parte 2); il rafforzamento delle rivendicazioni dello Stato sociale come risultato sia della tendenza non egualitaria delle società contemporanee e delle situazioni di vulnerabilità politicamente prodotte dall'ordine globale della nostra era, nonché dalla progressiva modernizzazione delle istituzioni tradizionali come la famiglia (parte 3); o le sfide giuridico-pratiche della regolamentazione dei «nuovi diritti» come quelli relativi alle risorse idriche o all'uso dei risultati dell'evoluzione scientifica e tecnologica (parte 4).

In quest'ottica i temi affrontati in questo come nei restanti volumi, consentono di analizzare la condizione complessiva degli Stati costituzionali in Europa, facendo il punto sulle evoluzioni compiutesi dalla fine della seconda

guerra mondiale e sulle risposte e letture fornite in questi decenni, chiamando, al contempo, la dottrina a guardare le sfide del futuro nel nuovo contesto globale. Il costituzionalismo continua ad espandersi, ma ha bisogno di nuovi strumenti per affrontare le attuali sfide, ancor più difficili da affrontare dopo un decennio di crisi economico-finanziaria, che ha avuto un forte impatto non solo sull'economia ma ha inciso anche profondamente sui nostri sistemi politici. In questo modo ci poniamo in una prospettiva, spaziale e temporale, che è quella dello *ius commune* costituzionale.

E pertanto, alla luce dei valori poc' anzi menzionati, abbiamo voluto celebrare la coincidenza dei due anniversari costituzionali affrontando tutte queste questioni attraverso un dibattito intergenerazionale che spera di arricchire la dottrina giuridica. Se questo imponente lavoro vede oggi la luce, è grazie, innanzitutto, a coloro che ci hanno aiutato volontariamente e talvolta in forma anonima a curare tutti i dettagli e grazie al contributo editoriale del BOE, in collaborazione con il *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales* e ai finanziamenti forniti dal Progetto Jean Monnet e dalla *Fundación Cajamurcia*, ai quali vogliamo indirizzare la nostra infinita gratitudine. Il nostro ringraziamento desideriamo che giunga non soltanto alle Istituzioni appena menzionate, ma anche ad ogni persona che ci ha accompagnato fino a questo porto. Tra queste vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento ad una delle persone che ha maggiormente contribuito alla realizzazione di questa iniziativa sin dalla sua nascita, che ha creduto nel nostro progetto e che ci ha accompagnato nella nostra crescita come studiosi: la professoressa Yolanda Gómez, attualmente Direttrice del CEPC, la quale ha gentilmente redatto il Prologo ai cinque volumi sul doppio evento costituzionale delle nostre penisole europee.

ANTONIO PÉREZ MIRAS, GERMÁN M. TERUEL LOZANO

EDOARDO C. RAFFIOTTA, MARIA PIA IADICICCO
Curatori

CARMEN MONTESINOS PADILLA
Coordinatrice

PARTE 3

**VULNERABILIDAD,
INMIGRACIÓN Y MENORES**

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ E CONDIVISIONE DEI COMPITI GENITORIALI DI CURA DEI FIGLI

BRUNO BRANCATI*
Università di Pisa

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I principi costituzionali. 3. La condivisione da parte dei genitori dei compiti di cura nella giurisprudenza costituzionale e nella legislazione ordinaria. 3.1 La giurisprudenza costituzionale. 3.2 La legislazione ordinaria. 4. Una valutazione del congedo obbligatorio di paternità. 5. Conclusioni. 6. Riferimenti bibliografici.

1. INTRODUZIONE

Questo contributo ha ad oggetto l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro (o congedo obbligatorio di paternità) del padre lavoratore dipendente, introdotto – accanto ad una forma ulteriore di astensione facoltativa – nell'ordinamento italiano in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, con la L. n. 92 del 2012 (c.d. Legge Fornero). Secondo la formulazione dell'art. 4, comma 24, lett. a) della suddetta legge, «il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo

* Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali Università di Pisa. Si desidera ringraziare la dott.ssa Anna Dieterich per gli interessanti spunti di riflessione.

di un giorno»; inoltre, la previsione contempla, sempre entro il medesimo periodo di cinque mesi, un periodo di astensione facoltativa¹. La L. n. 208 del 2015², con l'art. 1, comma 205, ha prorogato sperimentalmente per l'anno 2016 sia il congedo obbligatorio sia quello facoltativo di cui alla norma precedente, aumentando, peraltro, il congedo obbligatorio a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio è stata, poi, prorogata dalla L. n. 232 del 2016³, art. 1, comma 354, per gli anni 2017 e 2018: in particolare, la durata del congedo obbligatorio è due giorni per l'anno 2017 e quattro giorni per l'anno 2018, da godersi anche in via non continuativa⁴. Infine, la L. n. 145 del 2018⁵, con l'art. 1, comma 278, lett. a) e b), ha prorogato anche per l'anno 2019 l'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio, disponendo che per l'anno 2019 la durata sia pari a cinque giorni. Il padre lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di astensione di cui alle suddette previsioni a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione⁶. Occorre ricordare le finalità attribuite a tali previsioni dallo stesso art. 4, comma 24 della L. n. 92 del 2012, ovvero il sostegno alla genitorialità, la promo-

¹ Infatti, l'art.4, comma 24, lett. a) della L. n. 92 del 2012 prevede che «il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima». La previsione legislativa aggiunge altresì che il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per l'astensione, almeno quindici giorni prima dei medesimi.

² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

⁴ Per l'anno 2018, è stato previsto che il congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente, consentito in aggiunta al congedo obbligatorio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima, sia pari ad un giorno (vedi art. 1, comma 354, L. n. 232 del 2016; l'art. 1, comma 278, lett. c) della L. n. 145 del 2018, modificando l'art. 1, comma 354 della L. n. 232 del 2016, ha stabilito che la citata previsione relativa al congedo facoltativo per l'anno 2018 è estesa all'anno 2019).

⁵ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Trattando il tema del congedo di paternità, occorre anche richiamare – pur se con brevi cenni – l'evoluzione più recente del diritto dell'Unione europea. In particolare, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio ha dato agli Stati membri il compito di garantire che «il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore» (art. 4., par. 1). Gli Stati membri possono valutare se permettere che tale congedo venga fruito in parte prima della nascita del figlio oppure soltanto dopo la nascita, e se possa essere fruito con modalità flessibili (vedi art. 4, par. 1). La retribuzione o l'indennità del lavoratore in congedo di paternità devono garantire un reddito almeno equivalente a quello spettante in caso di interruzione del lavoro per motivi di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale, e possono essere subordinate a un certo periodo di occupazione precedente (vedi art. 8, par. 2). Gli Stati membri devono conformarsi a tali previsioni della direttiva entro il 2 agosto 2022 (vedi art. 20, par. 1). A decorrere da questa data, è abrogata la direttiva 2010/18/UE (vedi art. 19, par. 1).

⁶ Sia nel caso di congedo obbligatorio, sia nel caso di congedo facoltativo: (vedi art. 4, comma 24, lett. a) della L. n. 92 del 2012).

zione della cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e l'agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta, indubbiamente, di finalità che devono essere sposate, dato che la società italiana è caratterizzata da una forte asimmetria nella ripartizione del lavoro familiare, come risulta da dati ed elaborazioni forniti dall'Istat⁷. Tale asimmetria pare corrispondere ad un insufficiente invero dei principi costituzionali, nella misura in cui non è generata da una libera scelta delle donne, ma costituisce il frutto di condizionamenti sociali. Ci si deve chiedere, tuttavia, se una misura legislativa come quella oggetto di questo contributo sia idonea al raggiungimento degli scopi, in particolare di quello della maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e non si ponga in attrito con altri principi costituzionali.

2. I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Ai fini di questo contributo, può essere utile considerare i principi costituzionali rilevanti in materia. Certamente, il mondo del lavoro e la conciliazione degli impegni lavorativi e familiari rappresentano un serio banco di prova per la realizzazione dell'uguaglianza e della parità tra uomo e donna. Infatti, la pari dignità sociale e l'eguaglianza davanti alla legge devono essere assicurate, tra l'altro, «senza distinzione di sesso» (art. 3, 1° comma, Cost.). Inoltre, la scarsa condivisione dei compiti nell'ambito della coppia e della famiglia potrebbe rappresentare uno di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che la Repubblica ha il compito di rimuovere, in quanto, «limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»

⁷ Si rinvia all'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica GIORGIO ALLEVA (2017), dinanzi alla I Commissione «Affari costituzionali» della Camera dei Deputati, Roma, 25 ottobre 2017, volta a contribuire ai lavori della Commissione concernenti l'Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità di genere, disponibile in: https://www.istat.it/it/files/2017/10/A-Audizione-parità-di-genere-25-ottobre_definitivo.pdf (Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, 2017, 5-18). In particolare, in base alla suddetta audizione, la percentuale di carico di lavoro familiare che grava sulla donna (fascia 25-44 anni) sul totale del carico di lavoro familiare di una coppia in cui entrambi i membri sono occupati ammontava al 71,9% nel 2008-2009 e al 67% nel 2013-2014 (vedi Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, 2017, 13). Inoltre, il fattore-coppia o il fattore-figli incidono negativamente sul tasso di occupazione delle donne: «nel secondo trimestre 2017 il tasso di occupazione delle 25-49enni è l'81,1% per le donne che vivono da sole, il 70,8% per quelle che vivono in coppia senza figli, e il 56,4% per le madri» (vedi Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, 2017, 13); nel 2016, dopo un miglioramento degli anni precedenti, è diminuito di 1,8 punti il rapporto tra il tasso di occupazione delle 25-49enni con figli in età prescolare e il tasso di quelle senza figli, per cui su 100 occupate senza figli vi sono 76 madri lavoratrici con bambini piccoli (PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2017, 13).

(art. 3, 2° comma, Cost.). Al contempo, la Costituzione italiana contiene alcune previsioni specificamente dedicate alla donna lavoratrice: in particolare, viene in rilievo l'art. 37, 1° comma, in base al quale «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore» (1° periodo) e le condizioni di lavoro devono non soltanto «assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione», ma anche consentire l'adempimento della «essenziale funzione familiare» della donna lavoratrice (2° periodo). Le previsioni dell'art. 37, 1° comma sono molto problematiche, a causa della «difficile coesistenza» (Mazzotta, 2008, 156) tra parità e tutela, la quale sembrerebbe non poter trovare una composizione irenica⁸. In effetti, la formula «essenziale funzione familiare» può far sorgere perplessità. Si è parlato di un riferimento «non [...] del tutto chiaro» (Gigante, 2007, 34), di una previsione (quella dell'art. 37, 1° comma, Cost.) «di difficile lettura» e molto ambigua (Ballestrero, 2007, 81). Sicuramente, la previsione in questione mira a fornire una tutela particolare per la donna, per fare in modo che il suo coinvolgimento nel mondo del lavoro non rechi un pregiudizio insostenibile al ruolo familiare; da questo punto di vista, Cartabia (2007, 72) evidenzia le potenzialità dell'art. 37 della Costituzione, potendo esso rappresentare il fondamento di misure positive volte a rendere agevole «il difficile contemperamento tra funzioni familiari, lavorative e sociali che in ogni caso caratterizzano la vita della donna». L'aspetto problematico risiede nel fatto che la previsione sembra presupporre che la funzione familiare sia una specificità della donna, che la distingue dall'uomo. Si tratta indubbiamente di una previsione che risente fortemente del contesto storico in cui è stata partorita, all'esito di un confronto dialettico tra la posizione democristiana e quella della sinistra⁹ in Assemblea costituente (Mazzotta, 2008, 156). Come è stato ricordato (Gigante, 2007, 34), la formula della essenzialità della funzione familiare fu proposta dal democristiano Moro nel dibattito tenutosi nella I sottocommissione, per evitare la formulazione del democristiano La Pira, secondo la quale la funzione familiare assumeva il carattere della prevalenza; dunque, nell'ottica di Moro l'aggettivo «essenziale» doveva servire a evitare che la funzione familiare venisse considerata come principale e la funzione lavorativa come accessoria. Comunque, quand'anche quest'obiettivo possa dirsi raggiunto dalla formula testuale, le ambiguità non sembrano fuggite del tutto, visto che, come notava il socialista Basso, affermare che per la donna la funzione familiare sia essenziale pare implicare che per l'uomo non lo sia, o comunque non lo

⁸ Per MAZZOTTA (2008, 157), «non può esservi dubbio che l'accentuazione degli interventi protettivi a favore della donna (specie se legati alla sua funzione di madre) si presti *oggettivamente* ad allontanare gli obiettivi paritari, rendendo più rigido per le imprese il lavoro femminile».

⁹ Occorre ricordare che nella visione socialista e marxista la donna deve essere liberata, innanzi tutto, dai rapporti di dominio presenti nella famiglia monogamica (vedi Pasquino, 2006, 716).

sia in pari grado (Gigante, 2007, 34-35). Questa implicazione crea una asimmetria, in quanto riferisce una certa funzione, quella familiare – con i suoi oneri e onori – alle donne e non agli uomini (o comunque in misura più significativa alle prime), in virtù di una sorta di attributo dipendente dall'essere donna. Ovviamente, esistono oggettive differenze che distinguono la donna dall'uomo, correlate alla maternità, ed esse trovano già specifica considerazione nella Costituzione (si pensi allo stesso art. 37, 1° comma, nella parte in cui esige «una speciale adeguata protezione» per la madre e per il bambino, e all'art. 31, 2° comma, nella parte in cui afferma che la Repubblica «protegge la maternità [...] favorendo gli istituti necesari a tale scopo»). L'ulteriore previsione di una «essenziale funzione familiare» sembrerebbe contemplare ulteriori specificità rispetto a quelle appena richiamate¹⁰. Ebbene, si deve considerare che il dato secondo cui nella società italiana il peso (e anche le gioie) della famiglia sia assegnato in misura maggiore alla donna è il frutto (almeno in buona parte) di condizionamenti storici, economico-sociali e culturali, i quali si pongono in contrasto con i principi supremi di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione. Il contrasto con l'art. 3, 1° comma Cost. si presenta in quanto la pari dignità sociale, sebbene non necessariamente implichi che tutti debbano poter svolgere qualsiasi ruolo allo stesso modo, sicuramente richiede che, allorquando siano previste differenziazioni, queste si radichino in motivazioni fondate. Il contrasto con l'art. 3, 2° comma, si rivela nel momento in cui si riconoscono dei condizionamenti esterni che impongono alla donna di dedicarsi alla famiglia più dell'uomo: in quanto tali, essi comprimono la libertà (sia della donna, sia dell'uomo, sia della coppia) e si possono qualificare, pertanto, come «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». La limitazione e l'impedimento di cui all'art. 3, 2° comma Cost. non risiedono, ovviamente, nella dedizione alla famiglia – compito nobile, faticoso e vitale per il genere umano¹¹ – ma nell'imposizione di tale dedizione maggiormente a certi soggetti e meno ad altri. In maniera speculare, i condizionamenti storici, economico-sociali e culturali che impongono all'uomo maggior-

¹⁰ MAZZOTTA (2008, 156-157) ricorda che per superare l'ambiguità è stata proposta una lettura che enfatizza la parità e consente alle donne di preferire o la funzione familiare o l'attività lavorativa, ma l'A. considera tale lettura come «sostanzialmente correttiva», in quanto «cancella (o rimuove) il dato [...] della essenzialità della funzione familiare».

¹¹ Non si può certo ritenere che un'attività lavorativa al di fuori del contesto familiare abbia in sé un maggior valore della dedizione alla famiglia, se si pensa che la Costituzione riconosce «il valore della famiglia come luogo ove si svolge la personalità dell'individuo, e in particolare ove si assolvono compiti che sono il presupposto stesso affinché una società di individui possa concretamente formarsi ed operare» (DAL CANTO, 2015, 250).

mente il lavoro fuori dall'ambiente domestico e alla donna maggiormente il ruolo familiare rischiano di comportare una violazione dell'eguaglianza in sfavore dell'uomo, condizionato e indotto, in qualche modo, dall'esterno, a preferire il lavoro extra-domestico a quello familiare, essendo del tutto arbitrario ritenere che il primo comporti una maggiore dignità sociale e consenta un maggiore sviluppo della persona umana rispetto al secondo¹². Come è stato osservato (Marino, 2012, 296), l'avanzata lenta e difficile della cultura della condivisione del carico familiare da parte di uomini e donne fa sì che si tenda a percepire il tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro come una questione femminile, mentre in realtà riguarda anche gli uomini. Da tali considerazioni deriva che l'ordinamento dovrebbe in ogni caso muoversi sempre più nella direzione dell'abbandono di stereotipi culturali imposti alle persone, e della promozione dello sviluppo della persona umana e della sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale, sviluppo e partecipazione che devono essere il più possibile autentici e liberi. Ciò sembra auspicabile dal punto di vista dell'inveramento dei principi costituzionali di cui all'art.3, nonché di altri principi quali il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29, 2° comma, Cost., e quello di cui all'art. 30, 1° comma, Cost., secondo il quale mantenere, istruire ed educare i figli «è dovere e diritto dei genitori» (quindi di entrambi)¹³.

3. LA CONDIVISIONE DA PARTE DEI GENITORI DEI COMPITI DI CURA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA

3.1 La giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ha fornito importanti indicazioni relative al superamento di una concezione della donna come

¹² Si tenga in considerazione che la paternità oggi sta vivendo una fase delicata di trasformazione. Si parla, in letteratura, di una nuova paternità, «schiacciata fra inediti desideri e vecchie pratiche, fra modelli tradizionali di maschilità e nuove aspettative sociali» (CANNITO, 2015, 324).

¹³ Le ultime previsioni costituzionali richiamate trovano attuazione nella legislazione ordinaria, negli artt. 143, 1° comma, c.c. («con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri»), 147 c.c. («il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli [...]»), nonché nell'art. 315 bis, inserito dalla L. n. 219 del 2012, che al primo comma prevede che «il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori [...]»). Si può ricordare anche l'obbligo reciproco di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143, 2° comma, c.c., da intendersi come disponibilità dei coniugi al sacrificio di interessi individuali per salvaguardare esigenze oggettive della famiglia (TORRENTE-SCHLESINGER, 2015, 1228).

titolare principale del compito di cura dei figli e all'affermazione di una effettiva parità dei genitori nella condivisione delle funzioni genitoriali. Al contempo, la stessa Corte costituzionale ha messo in rilievo un elemento che gioca un ruolo assai importante nella distribuzione dei compiti genitoriali, in una data situazione concreta: l'accordo della coppia. Si può considerare, ad esempio, la sentenza n. 341 del 1991¹⁴, con cui la Corte giudicò una questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 7 della L. n. 903 del 1977, nella parte in cui non consentiva al lavoratore, affidatario in via provvisoria di un minore ai sensi dell'art. 10 della L. n. 184 del 1983, di fruire dell'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, qualora la moglie, anch'essa lavoratrice, vi avesse rinunciato d'accordo con lui. Il giudizio *a quo* riguardava la vicenda di due coniugi, entrambi affidatari in via provvisoria di un minore in stato di abbandono ai sensi dell'art. 10 della L. n. 184 del 1983, i quali, «di comune accordo, avevano ritenuto necessario ed opportuno, per il migliore inserimento del bambino loro affidato (affetto da ritardo psicomotorio), che fosse il marito, anziché la moglie, ad usufruire dell'astensione dal lavoro». Molto interessanti sono le parole con cui l'INPS¹⁵, che si era costituito nel giudizio, aveva sostenuto l'infondatezza della questione, affermando la maggiore idoneità della madre alla cura del figlio nel primo periodo di vita o nel primo periodo di ingresso in famiglia¹⁶. Richiamando la sua precedente sentenza n. 1 del 1987¹⁷, e il principio della «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi, tanto nella famiglia quanto rispetto alle attività extrafamiliari», la Corte evidenziò che, in riferimento all'istituto che veniva in rilievo nel giudizio *a quo*, ovvero l'affidamento provvisorio, l'astensione obbligatoria non è volta alla tutela della salute della madre – esigenza che emerge in relazione al parto – bensì, esclusivamente, ad agevolare il «processo di sviluppo – anche relazionale ed affettivo – del bambino, creando le condizioni di una più intensa presenza

¹⁴ Su cui vedi CARTABIA (2007, 69).

¹⁵ Istituto nazionale di previdenza sociale.

¹⁶ In particolare, l'INPS aveva affermato: «l'esperienza quotidiana dimostra incontestabilmente che, nel primo periodo di vita del figlio o, trattandosi di bambino ottenuto in affidamento provvisorio o preadottivo, nel primo periodo del suo ingresso in famiglia, la persona più idonea e qualificata per accudirlo e guidarlo nella delicata fase dello sviluppo psicofisico o dell'adattamento al nuovo ambiente familiare è la madre: non certamente il padre».

¹⁷ CARTABIA (2007, 68) ricorda tale sentenza come quella che segna l'avvio della stagione della giurisprudenza costituzionale che estende al padre lavoratore istituti posti dalle norme a tutela della maternità.

della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell'esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato compito». Concludeva la Corte che, non avendo rilievo alcuno la salute della madre in caso di affidamento provvisorio, non vi fosse ragione di escludere che il lavoratore affidatario potesse godere dell'astensione obbligatoria in alternativa alla lavoratrice affidataria¹⁸. La sensibilità della Corte si mostrò non soltanto nell'affermare che l'uomo è di per sé titolare dei compiti di cura e assistenza del minore quanto la donna, ma anche nel riconoscere che l'individuazione della figura che può rendersi maggiormente utile all'accompagnamento e allo sviluppo del minore non può che essere effettuata concordemente, sulla base delle peculiarità della situazione concreta, dalla coppia. Si potrebbe sintetizzare l'impostazione essenziale del ragionamento della Corte in questo modo: l'uomo e la donna sono entrambi titolari del diritto-dovere di provvedere alla cura e all'assistenza del minore; l'individuazione del soggetto che si dedica maggiormente a tali compiti deve essere effettuata, sulla base della peculiarità del caso¹⁹, dalla coppia, secondo una valutazione concorde finalizzata a promuovere nella misura più elevata possibile l'interesse del minore; occorre dunque rispettare la sfera decisionale della coppia, che dovrebbe essere in grado di valutare autonomamente ciò che è meglio per il minore nella situazione concreta della famiglia. Sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 179 del 1993, in cui veniva in esame l'istituto dei riposi giornalieri: la Corte di Cassazione, infatti, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della L. n. 903 del 1977, nella parte in cui non estendeva «al padre lavoratore, in alternativa alla madre, rinunciante, il diritto ai riposi giornalieri» di cui all'art. 10 della L. n. 1204 del 1971. La Corte costituzionale, ravvisando che l'istituto dei riposi giornalieri non soddisfa soltanto il bisogno dell'allattamento ed altre esigenze biologiche del neonato, ma, in genere, consente

¹⁸ Le seguenti parole della Corte ne rendono chiaro il pensiero: «Non vi è dubbio che la funzione 'materna' dell'affidataria sia particolarmente importante nella fase dell'ingresso del minore abbandonato nel nuovo nucleo familiare. Ma ciò non significa che tale funzione non possa e non debba essere svolta in piena integrazione con una altrettanto incisiva presenza dell'affidatario, il quale anzi potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo: e ciò nel quadro di una organizzazione della vita familiare e di lavoro valutata concordemente dai coniugi come idonea a meglio rispondere alle esigenze di cura e di assistenza del minore da parte di entrambe le figure 'genitoriali'. In questo senso, è ben possibile che, in relazione alle diverse situazioni che in concreto si possono manifestare, ed anche alla durata e al modo di svolgimento dei rispettivi impegni di lavoro, appaia razionale e necessario che l'astensione obbligatoria dal lavoro sia usufruita dall'affidatario in alternativa alla moglie, sulla base di valutazioni effettuate congiuntamente tra i coniugi e finalizzate esclusivamente al preminente interesse del bambino».

¹⁹ Nei compiti di cura del figlio, non può non avere rilievo una valutazione che i membri della coppia fanno anche relativamente alle proprie capacità e attitudini.

qualsiasi forma di assistenza del bambino, ricordò che – sebbene possa presumersi secondo l' *id quod plerumque accidit* che sia richiesto un maggior contatto con la madre nel primo anno di vita del bambino – il diritto-dovere di assistenza, anche verso il figlio di tenera età, spetta ad entrambi i genitori, essendo superata la rigida distinzione di ruoli tra uomo e donna, data la necessità di ricorrere spesso ad entrambe le figure genitoriali per un equilibrato sviluppo del bambino. Pertanto, la Corte dichiarò l'incostituzionalità della previsione nella parte in cui non estendeva al padre lavoratore il diritto ai riposi giornalieri, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, specificando che la delicata scelta del genitore che possa meglio soddisfare le esigenze del bambino debba essere affidata all'accordo dei coniugi, «in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del loro figlio». Si può ricordare, infine, la sentenza n. 385 del 2005, avente ad oggetto una questione di costituzionalità degli artt. 70 e 72 del D. Lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consentivano al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare – in alternativa alla madre – dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia. Anche in questa occasione, la Corte ricordò che entrambi i componenti della coppia sono protagonisti del processo di inserimento e assistenza del bambino, nonché affidatari dei compiti relativi, affermando che la scelta di chi debba assentarsi dal lavoro «non può che essere rimessa in via esclusiva all'accordo dei genitori».

3.2 La legislazione ordinaria

Anche in virtù della consapevolezza che focalizzare gli interventi protettivi soltanto sulla donna penalizza quest'ultima nel mondo del lavoro, il legislatore italiano, sulla spinta europea²⁰, è intervenuto per caricare anche il padre di quegli oneri familiari che, precedentemente, gravavano in misura prevalente sulla madre: in questo senso si può leggere la normativa costituita dalla L. n. 53 del 2000 e dal D. Lgs. n. 151 del 2001, che ha cercato di attuare un «superamento dei tradizionali ruoli genitoriali» (Mazzotta, 2008, 164)²¹. Il D. Lgs. n. 151 del 2001

²⁰ In particolare, si veda la direttiva 96/34/CE del 3 giugno 1996 del Consiglio, abrogata dalla direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

²¹ Si rinvia a CANNITO (2015) per una valutazione sociologica del D. Lgs. n. 151 del 2001. Per CANNITO (2015, 328), l'intervento legislativo, pur ancora piuttosto ancorato a una visione tradizionale, «attenua la centralità della lavoratrice madre biologica ampliando i diritti del padre lavoratore e riconoscendo il diritto/dovere alla cura di entrambi i genitori lavoratori, non necessariamente biologici».

può essere considerato, dunque, un completamento del percorso giurisprudenziale di estensione al padre degli istituti originariamente destinati alla madre (Cartabia, 2007, 69). In particolare, si possono ricordare gli istituti del congedo di paternità, dei congedi parentali, dei riposi e dei congedi per la malattia del figlio. Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, concernente il congedo di paternità, «il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre»²². Nella disciplina dei congedi parentali (astensione facoltativa), è chiaro l'intento del legislatore di creare una simmetria tra il padre e la madre (cercando, peraltro, di promuovere l'astensione dal lavoro del padre, come si vedrà *infra*). Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 151 del 2001, i congedi parentali spettano tanto alla madre lavoratrice, trascorso il periodo del congedo obbligatorio di maternità, quanto al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi²³. Tuttavia, se il padre lavoratore si astiene per un periodo non inferiore a tre mesi, il periodo massimo di astensione si eleva per lui a sette mesi (art. 32, comma 1, lett. b), e art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 151 del 2001)²⁴. Il periodo complessivo di astensione per entrambi i genitori non supera i dieci mesi, elevati a undici nel caso in cui il padre si astenga per non meno di tre mesi (art. 32, comma 1, e 32, comma 2, D. Lgs. n. 151 del 2001). L'art. 40 del D. Lgs. n. 151 del 2001 estende in determinati casi, al padre lavoratore, il diritto ai riposi giornalieri che l'art. 39 riconosce alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino. Tra questi casi vi è anche quello in cui il padre lavoratore fruisce dei riposi «in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga» (art. 40, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 151 del 2001). In questo caso, l'esercizio concreto del compito genitoriale può essere svolto dal padre in virtù del mancato ricorso della madre all'istituto del riposo. Pienamente simmetrica è la posizione dei genitori con riguardo ai congedi per la malattia del figlio. Infatti, il diritto ad astenersi dal lavoro spetta ai due genitori, alternativamente (ar. 47, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 151 del 2001)²⁵.

²² BALLESTRERO (2007, 110) evidenzia che nei congedi di paternità i padri sono titolari di diritti genitoriali in sostituzione della madre.

²³ BALLESTRERO (2007, 110) evidenzia che nei congedi parentali i padri sono titolari in proprio di diritti genitoriali.

²⁴ In ciò si nota il tentativo di incentivazione del ruolo genitoriale paterno (vedi Mazzotta, 2008, 169).

²⁵ BALLESTRERO (2007, 110) evidenzia che nei congedi per malattia del figlio e nei riposi giornalieri i padri sono titolari di diritti genitoriali in alternativa alle madri.

4. UNA VALUTAZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ

Alla luce della ricostruzione e delle considerazioni svolte, si cercherà di esprimere una valutazione sulla misura del congedo obbligatorio di paternità introdotto dalla L. n. 92 del 2012 e successivamente prorogato. La prima cosa che si può rilevare è che si tratta di una misura con un valore simbolico, ma con uno scarso impatto effettivo sulla realtà (in questo senso vedi le considerazioni sulla misura di Cannito (2015, 329); Rossi (2014, 59); Gottardi (2012, 614) – anche se si riferiscono alla versione originaria della misura, ovvero al congedo obbligatorio pari a un giorno). In effetti, il periodo di astensione obbligatoria (anche considerando l'ultima estensione a cinque giorni) appare comunque troppo breve per sostenere effettivamente la genitorialità e promuovere una cultura della condivisione dei compiti di cura. Oltre alla scarsa idoneità del mezzo a raggiungere il fine, si nota altresì che l'idea di promuovere una certa cultura attraverso la creazione di istituti giuridici, i quali vengono (almeno in parte) strumentalizzati per raggiungere fini di tipo educativo-culturale, desta qualche perplessità. Gli istituti giuridici dovrebbero servire a realizzare una regolazione il più possibile equa e ragionevole della realtà sociale, mentre per promuovere una trasformazione culturale ed educativa sarebbe più opportuno adottare strumenti della stessa natura (ovvero culturali ed educativi), che interpellino l'essere umano nella sua libertà e nella sua coscienza, piuttosto che obblighi giuridici, i quali vincolano dall'esterno, ma non necessariamente innescano una trasformazione dall'interno (potendo talvolta, anzi, innescare per reazione trasformazioni opposte a quelle desiderate). Come si è già detto, la misura è stata introdotta nell'ordinamento in via sperimentale, e la scarsa portata pratica potrebbe trovare spiegazione nella *ratio* che la concepisce come un esperimento. Facendo astrazione da ciò, comunque, la misura appare suscettibile di critica. In particolare, l'elemento che fa sorgere perplessità è quello dell'obbligatorietà dell'astensione per il padre²⁶. Come si è visto, nelle pronunce della Corte costituzionale ricordate l'estensione agli uomini degli istituti volti a consentire l'adempimento dei compiti di cura dei figli presupponeva che non venissero in rilievo esigenze di tipo biologico legate alla maternità naturale, bensì esigenze relazionali ed affettive del bambino. Da questo punto di vista, l'interesse che rappresenta il fine ultimo della tutela è l'interesse del minore, mentre gli interessi dell'uomo e della donna (a esercitare i propri diritti-doveri genitoriali) sono interessi (equiordinati tra di

²⁶ Il carattere obbligatorio è stato criticato da GOTTARDI (2012, 612-613), la quale ha sottolineato che – sebbene sia reale la preoccupazione che possano avvenire discriminazioni a danno dei padri, qualora si prevedesse un semplice diritto e non un obbligo – difficilmente «l'armatura dell'obbligo» (GOTTARDI, 2012, 613) si adatta alla politica di ripartizione dei ruoli familiari.

loro) tesi a raggiungere tale fine²⁷. Nella situazione concreta, però, potrebbe risultare che per raggiungere il fine della tutela (l'interesse del minore) sia preferibile che ai compiti di cura, in una certa fase, si dedichi maggiormente uno dei genitori, piuttosto che l'altro; una tale valutazione, peraltro, dovrebbe spettare alla coppia, visto che «i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare» (art. 144 c.c.). La misura sarebbe stata concepita in modo più rispettoso della sfera decisionale della coppia se il legislatore avesse previsto giorni aggiuntivi di congedo obbligatorio senza individuare il genitore tenuto ad usufruirne, ma anzi lasciando alla coppia tale individuazione. Pertanto, la misura in esame rischia di porsi in attrito sia con l'interesse del minore (visto che il miglior mezzo per raggiungerlo viene valutato in maniera astratta dal legislatore, e non – come dovrebbe essere – in concreto dai genitori), sia con l'autonomia di valutazione della coppia nel concordare l'indirizzo familiare. Infine, sembra sacrificato ingiustamente e in maniera sproporzionata anche il diritto al lavoro del padre, sotto il profilo della scelta di lavorare (e quindi di non astenersi dal lavoro), visto che le ragioni per cui tale diritto viene sacrificato non sono sufficientemente robuste, per quanto appena detto. Infine, si segnala un ulteriore elemento di perplessità. L'indennità del congedo di maternità è pari all' 80% della retribuzione, quella del congedo di paternità in esame in questa sede è pari al 100% della retribuzione: tale disparità non pare giustificabile (Gottardi, 2012, 613).

5. CONCLUSIONI

Queste brevi considerazioni conducono a concludere che rimane sempre attuale la celebre formula di Jemolo (1949/1957, 241), secondo la quale la famiglia è un'isola che il mare del diritto deve solo lambire²⁸. Non si deve dimenticare che nel riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale (ex art. 29 Cost.) si deve leggere sia il riconoscimento del «valore originario e pregiudiziale del consorzio familiare», sia – e conseguentemente – «l'impegno di rispettare l'autonomia delle singole famiglie, salva la necessità di intervenire a difesa dei figli 'nei casi di incapacità dei genitori' (art. 30, comma 2, Cost.)» (Torrente-Schlesinger, 2015, 1195). Nella formula di Jemolo, dunque, è condensata l'importanza di rispettare e garantire

²⁷ Il carattere della funzionalità della genitorialità rispetto all'interesse del minore si può ricavare dal fatto che i compiti dei genitori sono, certo, anche dei diritti, ma sono principalmente qualificabili come doveri (in questo senso, DAL CANTO, 2015, 252). Si noti che l'art. 30 Cost. afferma che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio», utilizzando la parole «dovere» prima della parola «diritto».

²⁸ Questa idea viene abbracciata anche dall'ordito dei principi della Costituzione italiana. In questo senso, ad esempio, vedi DAL CANTO (2015, 249).

l'autonomia della famiglia – la cui tutela va sempre apprestata con lo sguardo rivolto alla persona umana²⁹ – dalle possibili tentazioni di intrusione e di compressione degli spazi di libertà che potrebbero attrarre il legislatore. Detto ciò, si ribadisce che le finalità che il legislatore ha proclamato concependo la misura trattata in questa sede sono senz'altro condivisibili e desiderabili, nell'ottica di una maggiore realizzazione dei principi costituzionali e del miglioramento delle condizioni della società italiana. Si è affermato, infatti, che «i paesi a più alta fecondità e più bassa povertà sono quelli in cui è maggiore non solo la partecipazione femminile al mercato del lavoro ma anche quella maschile al lavoro familiare: paesi cioè in cui le politiche sostengono non solo la de-famizzazione della cura attraverso servizi e del costo economico dei figli attraverso assegni, ma anche la condivisione tra padri e madri delle responsabilità familiari, *in primis* tramite congedi di paternità o congedi genitoriali ben pagati con quote riservate ai padri» (Solera, 2015, 147). Da questo punto di vista, l'A. appena citata ricorda che è stata criticata anche la misura di cui all'art. 4, comma 24, lett. b) della Legge Fornero, ovvero l'introduzione di voucher per asili nidi e *baby-sitting* in cambio della rinuncia da parte della madre lavoratrice al congedo parentale (ovvero il periodo di astensione facoltativa)³⁰: la critica si fonda sul fatto che tale misura rafforzerebbe l'idea che i compiti di cura spetterebbero di per sé alle madri, e non (o meno) ai padri (Solera, 2015, 147). Non va dimenticato che un elemento che limita particolarmente la partecipazione dei padri ai compiti genitoriali consiste nel valore troppo basso dell'indennità corrisposta per i congedi parentali, pari al 30% della retribuzione, fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi³¹. Tale trattamento economico sembra influenzare negativamente la fruizione dei congedi parentali da parte dei padri (Solera, 2015, 147; Rossi, 2014, 59, che mette in evidenza pure il fattore culturale come concausa dello scarso utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri italiani), in quanto, data la differenza di livelli salariali a vantaggio degli uomini che sussiste nella società italiana, il congedo parentale del padre penalizzerebbe l'economia domestica più del congedo parentale della madre. Probabilmente, un mezzo più idoneo (e non meramente simbolico) alla promozione della condivisione dei compiti genitoriali potrebbe consistere nell'incrementare il trattamento economico dei congedi parentali (Solera, 2015, 147; Cannito, 2015, 331).

²⁹ Per un collegamento tra formazioni sociali – quale la famiglia ovviamente è – e principio personalista si può rinviare, ad esempio, alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in cui si afferma che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico».

³⁰ La misura relativa al contributo per asili nido e *baby-sitting* di cui all'art 4, comma 24, lett. b) della Legge Fornero non è stata prorogata per il 2019.

³¹ Vedi art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 151 del 2001.

6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BALLESTRERO, M. V. (2007), «La Costituzione e il lavoro delle donne. Eguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità», GIGANTE, M. (cur.), *I diritti delle donne nella Costituzione*, Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 75-114.
- CANNITO, M. (2015), «Quando il congedo è maschile? Vincoli e opportunità nell'uso dei congedi parentali da parte dei padri in Italia», *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, pp. 323-339.
- CARTABIA, M. (2007), «Donne, famiglia, lavoro: le principali tappe di un'evoluzione in corso», GIGANTE, M. (cur.), *I diritti delle donne nella Costituzione*, Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 45-73.
- DAL CANTO, F. (2015), «I diritti e i doveri costituzionali», ROMBOLI, R. (cur.), *Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo. Le fonti del diritto, i diritti e i doveri costituzionali e gli organi di garanzia giurisdizionale*, vol. II, Torino: Giappichelli Editore, pp. 188-327.
- GIGANTE, M. (2007), «Il dibattito costituzionale», GIGANTE, M. (cur.), *I diritti delle donne nella Costituzione*, Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 9-43
- GOTTARDI, D. (2012), «La condivisione delle responsabilità genitoriali in salsa italiana», *Lavoro e diritto*, 3-4, pp. 609-620.
- JEMOLO, A. C. (1949/1957), «La famiglia e il diritto», SCAVO LOMBARDO, L. (cur.), *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano: Giuffrè, pp. 222-241.
- MARINO, M. (2012), «La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: una «policy» per le donne e per gli uomini in una prospettiva di maggiore occupazione per tutti», *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, XXVI(1-2), pp. 295-317.
- MAZZOTTA, O. (2008), *Diritto del lavoro*, Milano: Giuffrè Editore.
- PASQUINO, G. (2006), «Femminismo», BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G. (cur.), *Dizionario di politica*, vol. 1, Roma: Gruppo Editoriale l'Espresso, pp. 715-722.
- PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, ALLEVA G. (2017), *Audizione dinanzi alla I Commissione «Affari costituzionali» della Camera dei Deputati*, Roma, 25 ottobre 2017
https://www.istat.it/it/files/2017/10/A-Audizione-parità-di-genere-25-ottobre_definitivo.pdf.
- ROSSI, G. (2014), «Funamboli senza rete. La conciliazione dal punto di vista dei padri», *Autonomie locali e servizi sociali*, 1, pp. 57-80.
- SOLERA, C. (2015), «Il Bonus bebè del governo Renzi: quanto «bonus»?», *Politiche sociali*, 1 pp. 143-148.
- TORRENTE, A.; SCHLESINGER, P. (2015), *Manuale di diritto privato*, Anelli, F.; Granelli, C. (cur.), Milano: Giuffrè Editore.

Europa, en realidad el mundo entero, vive un momento complejo. En particular los ritmos de la globalización económica, los avances tecnológicos, los profundos cambios sociales y las convulsiones político-institucionales por las que están pasando las democracias occidentales hacen más que necesario que nos preguntemos por las perspectivas del constitucionalismo contemporáneo. Por ello, aprovechando las efemérides del 70º aniversario de la Constitución italiana y del 40º de la Constitución española, esta obra publicada en cinco volúmenes recoge los trabajos de constitucionalistas europeos de distintas generaciones que abordan los desafíos que se presentan para nuestras sociedades democráticas.

El volumen I se dedica al balance y perspectivas en la Europa constitucional, con trabajos sobre la reforma de los ordenamientos constitucionales y sobre Europa en su dimensión constitucional. El volumen II se ocupa de estudiar cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y su tutela. El volumen III revisa el estado de las instituciones políticas democráticas, en particular de los sistemas parlamentarios europeos, la participación y representación políticas, y los sistemas electorales y de partidos. El volumen IV afronta el tema de las fuentes del Derecho, los cambios en la Justicia constitucional y los desafíos para la organización territorial. Por último, el volumen V, dedicado a los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, desarrolla cuestiones de frontera para el Derecho constitucional de gran actualidad como son las relaciones con la economía y el Estado social, la revolución tecnológica y el cambio climático, la seguridad y la legalidad sancionadora, y el fenómeno religioso. Una visión completa de los grandes temas que antes como ahora preocupan y dan sentido a la investigación de los constitucionalistas en un espacio compartido como es Europa.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

italospagnolo
SEMINARIO



FUNDACIÓN CAJAMURCIA